

## A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Dña. Ana Isabel ALÓS LÓPEZ, Diputada por Huesca, D. Silverio ARGÜELLES GARCÍA, Diputado por Asturias, Dña. Bella VERANO DOMÍNGUEZ, Diputada por Huelva, D. Pedro Samuel MARTÍN GARCÍA, Diputado por Salamanca, D. Antonio MARTÍNEZ GÓMEZ, Diputado por Albacete, Dña. Patricia RODRIGUEZ CALLEJA, Diputada por Ávila, D. Bartolomé MADRID OLMO, Diputado por Córdoba, D. Enrique Belda PÉREZ-PEDRERO, Diputado por Ciudad Real, Dña. Mª del Socorro CUESTA RODRÍGUEZ, Diputada por Segovia, Dña. Sandra FERNÁNDEZ HERRANZ, Diputada por Baleares, Dña. Beatriz JIMÉNEZ LINUESA, Diputada por Cuenca, Dña. Mª Sandra MONEO DÍEZ, Diputada por Burgos, D. Agustín PARRA GALLEGO, Diputado por Barcelona, Dña. Violante TOMAS OLIVARES, Diputada por Murcia, y Mª del Mar VÁZQUEZ JIMÉNEZ, Diputada por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desean obtener respuestas por escrito.

El presidente del Consejo Económico y Social entregó en mano el pasado 16 de septiembre de 2024 al presidente del Gobierno el estudio 'Economía, Trabajo y Sociedad: Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España', en el que se plantea que "el proceso de digitalización de la economía [...] entraña riesgos importantes que pueden afectar a los derechos fundamentales de las personas, requiriendo una atención constante sobre un entorno de cambios muy rápidos y de complejidad creciente" en el que resulta necesaria "la adaptación de los derechos para proteger los valores y la seguridad jurídica de la ciudadanía en su acceso a bienes y servicios".

Por ello se pregunta:



¿Se tiene previsto desde el Gobierno materializar en algún momento alguna medida de utilidad real ante el hecho de que, según plantea el Consejo Económico y Social, "el proceso de digitalización de la economía [...] entraña riesgos importantes que pueden afectar a los derechos fundamentales de las personas, requiriendo una atención constante sobre un entorno de cambios muy rápidos y de complejidad creciente" en el que resulta necesaria "la adaptación de los derechos para proteger los valores y la seguridad jurídica de la ciudadanía en su acceso a bienes y servicios"?

De ser así, ¿Qué medidas se tiene previsto materializar? ¿En qué consistirán exactamente esas medidas? ¿Qué recursos -tipos y cantidades- invertirá el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para aprobar y materializar dichas medidas? ¿En qué plazos reales de tiempo se tiene previsto desde el Gobierno impulsar, liderar, coordinar o poner en marcha esas medidas?

De no ser así, ¿Por qué motivos?

Madrid, 29 de octubre de 2024

20 150

Ylan

ED -

0:

LOS DIPUTADOS

Fdo:

LA SECRETARIA GENERAL